

Señor

JUZGADO TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO ORAL CIRCUITO JUDICIAL BOGOTÁ
Sección Tercera

Bogotá

E. S. D.

REFERENCIA: CONTESTACIÓN DE DEMANDA
RADICACIÓN: 110013336033-2022-00329-00
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: JOHANA CARDENAS HURTADO Y OTROS
DEMANDADO: DISTRITO ESPECIAL DE CALI; NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL Y OTROS

ADRIANA MARCELA LEÓN BOTINA, mayor de edad, residente en Santiago de Cali, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 59.123.942 expedida en El Tambo (N), con Tarjeta Profesional No. 220.245 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderada del Distrito Especial de Santiago de Cali en el proceso de la referencia, encontrándome dentro del término legal, me permito contestar la demanda de la referencia, instaurada por en contra del DISTRITO ESPECIAL DE CALI; NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL Y OTROS, con fundamento en las consideraciones fácticas y jurídicas que se exponen a continuación:

I. HECHOS

Al hecho 2.2.1: De conformidad con el Registro Civil de nacimiento se tiene que el menor Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.), nació el 28 de diciembre de 2005 en el Distrito de Buenaventura, pero no nos consta que le gustaba bailar música urbana, fútbol; ni mucho menos me consta que su sueño era ser futbolista. Así mismo, de conformidad con el registro civil de defunción el menor falleció el 11 de agosto de 2020. Las demás afirmaciones no me constan.

Al hecho 2.2.2: Es cierto de conformidad con la copia del Registro Civil de Nacimiento del menor, la señora Johana Cárdenas Hurtado se registra como la madre de menor Leider Cárdenas Hurtado. Sin embargo, si de ello la parte actora pretende derivar alguna consecuencia jurídica, deberán probar sus aseveraciones mediante los medios probatorios pertinentes, útiles y conducentes.

Al hecho 2.2.3: De conformidad con los registros civiles que se aportaron con la demanda, se puede evidenciar que el menor Leider Cárdenas Hurtado, tenía cinco hermanos Víctor Alfonso Cárdenas Hurtado, Darwin Camilo Cárdenas Hurtado, Brayan Cárdenas Hurtado, Marolyn Tatiana Cárdenas Hurtado, Yari Camila Cárdenas Hurtado. Sin embargo, si de ello la parte actora pretende derivar alguna consecuencia jurídica deberán probarlos, mediante los medios probatorios pertinentes, útiles y conducentes.



SC-CER652615

Al hecho 2.2.4: De conformidad con los documentos obrantes en 03 pruebas que obran en el expediente digital, se colige que el menor Leider Cárdenas Hurtado al momento de su fallecimiento tenía tres tíos Yeison Cárdenas Hurtado, Francia Elena Cárdenas Hurtado, Luis Eduardo Cárdenas Hurtado. Sin embargo, si de aquella relación la parte actora pretende derivar alguna consecuencia jurídica deberán probarlos, mediante los medios probatorios pertinentes, útiles y conducentes.

Al hecho 2.2.5: De conformidad con los documentos obrantes en 03 pruebas que obran en el expediente digital, se colige que el menor Leider Cárdenas Hurtado al momento de su fallecimiento tenía una abuela, la señora Martha Hurtado Cárdena. Sin embargo, si de aquella relación la parte actora pretende derivar alguna consecuencia jurídica deberán probarlos, mediante los medios probatorios pertinentes, útiles y conducentes.

Al hecho 2.2.6: No es un hecho en estricto sentido, lo consignado en este numeral hace alusión a la transcripción de un aparte de la Alerta Temprana No. 085 de 2018- adiada el 13 de diciembre de 2018.

Sin embargo, si bien dicha alerta hace alusión al riesgo que se encuentran los habitantes del barrio Llano Verde y otros barrios de la comuna 15 del hoy Distrito Especial de Santiago de Cali, menester indicar desde ya, que los hechos que dieron origen al presente medio de control, carecen de nexo de causalidad, toda vez, que los lamentables acontecimientos en los que desafortunadamente perdió la vida el menor Leider Cárdenas Hurtado no están ligados a grupos armados ilegales, narcotráfico, ELN, FARC-EP, Guerrillas Unidas del Pacífico.

Entonces el crimen no fue perpetrado por los actores armados indicados en la alerta temprana, por el contrario, en el decurso del proceso penal la Fiscalía logró concluir que los responsables de los hechos en los que falleció el menor eran trabajadores del área de seguridad de un cañaduzal de llano verde, siendo condenados Yeferson Marcial Angulo Quiñones, Juan Carlos Loaiza Ocampo y Gabriel Alejandro Bejarano por los delitos de HOMICIDIO AGRAVADO EN CONCURSO HEMOGÉNEO Y SUCESIVO, EN CONCURSO HETERÓGENEO CON FABRICACIÓN, TRÁFICO PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES AGRAVADO.

Así las cosas, de conformidad con el material probatorio que obra en el expediente se evidencia que los hechos en los que falleció el menor Leider Cárdenas Hurtado, el ente territorial demandado no participó en la producción del daño, máxime cuando el mismo conforme se estableció en la investigación efectuada por la Fiscalía y de acuerdo a lo indicado en las sentencias penales condenatorias, se produjo como consecuencia de la conducta de un tercero.

Al hecho 2.2.8: Lo consignado en este numeral corresponde a la captura o pantallazo de un aparte del acta de inspección de a lugares – FPJ-9 de la Policía Judicial del 12 de

agosto de 2020 (pág. 2 y 3), donde se realiza una descripción del lugar de la diligencia incluyendo los hallazgos y procedimientos.

Al hecho 2.2.9.: Al igual que lo manifestado en el numeral anterior, lo ahí consignando corresponde a captura o pantallazos del Acta de inspección técnica a cadáver – FPJ-10 de la Policía Judicial y del Informe de Investigador de Laboratorio – FPJ13 de la Policía Judicial, respectivamente.

Sobre el particular, es relevante aclarar, que si bien en el Acta de inspección técnica a cadáver – FPJ-10 de la Policía Judicial se indica que el lugar donde se materializaron los hechos es un lote baldío coordenadas N 03°22'54,53" – W 76°30'11,36", que, consultado ante la Unidad Administrativa de Bienes y servicios del Distrito de Cali, se estableció que para dichas coordenadas corresponde la matrícula inmobiliaria 370- 529516 y Predio Catastral Z000407760000.

Así mismo, mediante comunicación oficial No. 202241810100043024 del 19 de septiembre de 2022, se indicó:

“(…) una vez consultados nuestros archivos, el Sistema de Información de Bienes Inmuebles de la Alcaldía de Santiago de Cali – SIBICA, las bases de datos que registran el patrimonio inmobiliario de Santiago de Cali y el estudio realizado sobre el folio de matrícula inmobiliaria en mención, se logró determinar que dicho predio, el cual corresponde según el registro de folio señalado al Lote de Terreno “Las Vegas- Sector Norte” Lote 7 “Las Flores” no forma parte del patrimonio inmobiliario de la Alcaldía de Santiago de Cali y por lo tanto no tiene carácter de bien fiscal, ejido o bien de uso público propiedad de este Distrito Especial.”

Al hecho 2.2.10: Lo consignado en este numeral hace referencia a la captura de apartes del informe de perfilación criminal de fecha 27 de agosto de 2020, del proceso judicial con número de noticia criminal 760016000193202006645, del menor Leider Cárdenas Hurtado, frente al cual no se realizará pronunciamiento alguno.

Sin embargo, se reitera que, de conformidad con el material probatorio que obra en el expediente se evidencia que los hechos en los que falleció el menor Leider Cárdenas Hurtado, el ente territorial demandado no participó en la producción del daño, máxime cuando el mismo, conforme se estableció en la investigación efectuada por la Fiscalía y de acuerdo a lo indicado en las sentencias penales condenatorias, se produjo como consecuencia de la conducta de Yeferson Marcial Angulo Quiñones, Juan Carlos Loaiza Ocampo y Gabriel Alejandro Bejarano quienes fueron condenado por los delitos de HOMICIDIO AGRAVADO EN CONCURSO HEMOGÉNEO Y SUCESIVO, EN CONCURSO HETERÓGENEO CON FABRICACIÓN, TRÁFICO PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES AGRAVADO de Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D) y otros cuatro menores de edad; quienes, conforme a las investigaciones adelantadas eran guardias de seguridad del cañaduzal.

Al hecho 2.2.11 y 2.2.12: Lo registrado en estos numerales son apartes de informe de investigador de campo FPJ- 11 del 14 de agosto de 2012 noticia criminal 760016000193202006645, en el que se consignó las labores de vecindario, las actuaciones realizadas, como el bosquejo topográfico de la escena del crimen.

Al hecho 2.2.13: Aquí se hace referencia al informe de investigador de campo –FPJ-11 en el que se consigna las actuaciones realizadas el 12 de agosto de 2020 por el laboratorio móvil de criminalística policía judicial.

Al hecho 2.2.14: No es un hecho en estricto sentido, lo consignado en este numeral es la captura de la declaración jurada – FPJ-15 rendida el 26 de agosto del 2020, por el señor Jhon Alexander Vera Ocampo, quien para la época de los hechos se desempeñaba como asistente de talento humano en la Empresa Control Interno y Transporte SAS.

Al hecho 2.2.15: Es parcialmente cierto, no es cierto que el apoderado judicial de los demandantes presentara derecho de petición.

Validado el Sistema de Gestión Documental y procesos Orfeo, encontramos que la petición fue presentada por OSCAR FERNANDO RAMIREZ ORDOÑEZ como Técnico investigador II de la Fiscalía General de la Nación, a la que le correspondió el radicado 202041730101238142.

Y lo indicado en el numeral, es la transcripción parcial de la respuesta dada mediante Orfeo No. 202041630010011561 del 24 de agosto de 2020.

Sin embargo, sí de ello la parte actora pretende derivar alguna consecuencia jurídica deberán probarlos, mediante los medios probatorios pertinentes, útiles y conducentes.

Al hecho 2.2.16: Lo consignado en este numeral alude a una nota periodística publicada el 29 de agosto de 2020 por el canal digital Bluradio, en la que se indica que al parecer el homicidio de los 5 niños en el sector de Llano Verde serían cometidos por vigilantes, según investigación de la Fiscalía.

Es de resaltar que conforme lo ha señalado el Consejo de Estado la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental. Sin embargo, en principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos.

Al hecho 2.2.17: No me consta si el apoderado judicial de los demandantes radicara el 31 de agosto de 2020 ante la defensoría del Pueblo petición y que este organismo mediante radicado 20200060342255681, ni mucho menos nos consta el contenido de la respuesta, por haberse radicado la petición ante otra entidad, de la cual no tiene ningún

tipo de injerencia y mucho menos conocimiento.

No obstante lo anterior, nótese que se hace referencia a las “posibles denuncias de los reclutamientos ilegales en las comunas 14, 15 y 21 del Municipio de Santiago de Cali” y en el aparte de la repuesta que transcribe el apoderado de los actores se indica “(...) (AT 085-18) se hicieron las respectivas recomendaciones referentes a la seguridad, reclutamiento de menores y demás inversiones que se requieren para la ejecución de las políticas públicas en ese sector de la capital del Valle”.

Así las cosas, es importante reiterar al señor Juez que el homicidio del menor Leider Cárdenas Hurtado, como se concluyó con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, no obedeció a un reclutamiento ilegal, sino que el mismo se perpetró por Yeferson Marcial Angulo Quiñones, Juan Carlos Loaiza Ocampo y Gabriel Alejandro Bejarano quienes fueron condenados por los delitos de HOMICIDIO AGRAVADO EN CONCURSO HEMOGÉNEO Y SUCESIVO, EN CONCURSO HETERÓGENEO CON FABRICACIÓN, TRÁFICO PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES AGRAVADO, además conforme las actividades investigativas y labores de campo e investigativas se pudo establecer que los perpetradores del homicidio eran vigilantes del cañaduzal y el crimen obedeció a motivos de intolerancia.

Al hecho 2.2.18: Lo consignado en este numeral alude a una nota periodística publicada el 15 de enero de 2021 por el canal digital Vanguardia.com, en la que se registra la captura de Gabriel Bejarano.

Es de resaltar que conforme lo ha señalado el Consejo de Estado la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental. Sin embargo, en principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos.

Al hecho 2.2.19: Lo consignado en este numeral alude a una nota periodística publicada 09 de septiembre de 2020, por el canal digital rcnradio.com.

Es de resaltar que conforme lo ha señalado el Consejo de Estado la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental. Sin embargo, en principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos.

Por otro lado, es menester indicar que el Distrito Especial de Santiago de Cali, no tiene injerencia, ni competencia sobre la imposición de la medida detención domiciliaria y/o prisión domiciliaria, siendo esta de competencia del juez penal.

Al hecho 2.2.20: Lo consignado en este numeral alude a una nota periodística publicada



SC-CER852615

06 de septiembre de 2020, por el canal digital “eltiempo.com.co”.

Es de resaltar que conforme lo ha señalado el Consejo de Estado la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental. Sin embargo, en principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos.

Por otro lado, es menester indicar que el Distrito Especial de Santiago de Cali, no tiene injerencia, ni competencia sobre la imposición de la medida detención domiciliaria y/o prisión domiciliaria, siendo esta de competencia del juez penal.

Al hecho 2.2.21: Lo consignado en este numeral alude a una nota periodística publicada 07 de septiembre de 2020, por el canal digital “eltiempo.com.co”.

Es de resaltar que conforme lo ha señalado el Consejo de Estado la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental. Sin embargo, en principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos.

Al hecho 2.2.22: Lo consignado en este numeral alude a una nota periodística publicada 28 de agosto de 2020, por el canal digital “rcnradio.com”.

Es de resaltar que conforme lo ha señalado el Consejo de Estado la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental. Sin embargo, en principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos.

Al hecho 2.2.23: No me consta si el apoderado judicial de los demandantes radicó Derecho de petición ante el Instituto Nacional Penitenciario y carcelario – INPEC, como tampoco me consta que el 03 de septiembre del año 2020, recibiera respuesta del mismo, pues, la petición fue radicada en otro organismo que es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Justicia, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.

Al hecho 2.2.24: Lo consignado en este numeral alude a una nota periodística publicada 12 de agosto de 2020, por el canal digital “caracol.com.co”.

Es de resaltar que conforme lo ha señalado el Consejo de Estado la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental. Sin embargo, en principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático

de los hechos.

Al hecho 2.2.25: No me constan las manifestaciones que hubiese realizado la Personería de Santiago de Cali mediante oficio No. 210.10.1 rad. 20212100361341 en cumplimiento Fallo de Tutela No. 2021-00231 del 12 de noviembre de 2021 proferido por el Juzgado 2º Administrativo de Pereira.

Frente a la alerta temprana 085 de 2015, la Secretaría de Seguridad y Justicia de la actual administración en materia de prevención del delito y de la violencia tiene un enfoque especial en los sectores más vulnerables de la ciudad. De acuerdo con la información entregada por el Observatorio de Seguridad se han liderado acciones preventivas y disuasivas en las comuna 15. Esta priorización de trabajo en campo permitió identificar los procesos en materia de gestión territorial de la seguridad que estaban dando resultado en el gobierno pasado mediante la Prevención Situacional del Delito (PSD), programa que sirvió para proyectar las respuestas a las alertas en 2019 y que fue continuado en esta administración. Así mismo, se cuenta con el Equipo de Acción de Emergencias (EAE) que garantiza la atención oportuna de manera preventiva, solidaria y subsidiaria de víctimas del conflicto armado, lideresas y líderes defensores de Derechos Humanos y se ha puesto en marcha el protocolo de mujeres en riesgo inminente de feminicidio de acuerdo con los lineamientos de la Ley 1148/2011, la Ley 1257/2008 y el Decreto 0516/2016 con base en la competencia funcional de la Subsecretaría de la Política de Seguridad. Adicional a esto, el equipo Perla que está encargado de la Prevención de la Violencia Juvenil está orientado y articulado con el programa de Tratamiento Integral de Pandillas (TIP) del área de Prevención Ciudadana (PRECI) de la Policía Metropolitana y el área de Paz y Derechos Humanos de la misma institución logrando una articulación y prevención de las violencias en las comunidades que habitan el oriente de la ciudad¹.

Al hecho 2.2.26: No es un hecho, es la transcripción de la manifestación personal de un Concejal del Distrito Especial de Santiago de Cali.

Al hecho 2.2.27: Este numeral contiene varios pronunciamientos, frente a los cuales procedo a dar respuesta de la siguiente manera:

Lo consignado en el primer aparte alude a una nota periodística publicada por el canal digital “elcolombiano.com”

Es de resaltar que conforme lo ha señalado el Consejo de Estado la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental. Sin embargo, en principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático

¹ Radicado Orfeo No. 202041610400013271 del 20 de agosto de 2020, respuesta Asunto: Respuesta a oficio Acción Preventiva E- 2020-004205

de los hechos.

Frente al aparte final de lo manifestado en este numeral, es de resalta que contienen apreciaciones subjetivas del apoderado judicial de los demandantes que deben ser acreditados a través de los medios probatorios pertinentes.

Al hecho 2.2.28: No es un hecho en estricto sentido, lo consignado es un aparte del “elpais.com.co”, que se publicó el 14 de agosto de 2020, lo cual no puede considerarse como un hecho notorio.

Al hecho 2.2.29: Lo consignado en este numeral alude a una nota periodística publicada 14 de agosto de 2020, por el canal digital “www.eltiempo.com.co”.

Es de resaltar que conforme lo ha señalado el Consejo de Estado la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental. Sin embargo, en principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos.

Al hecho 2.2.30: Lo consignado en este numeral alude a una nota periodística publicada 1 de septiembre de 2020, por el canal digital “noticiasrcn.com”.

Es de resaltar que conforme lo ha señalado el Consejo de Estado la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental. Sin embargo, en principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos.

No obstante lo anterior, es importante resaltar que a la fecha de radicación de la demanda y contestación de la misma, el crimen de los menores asesinados en un cañaduzal, ya fue resuelto y fueron condenados: Yeferson Marcial Angulo Quiñones, Juan Carlos Loaiza Ocampo y Gabriel Alejandro Bejarano quienes fueron condenados por los delitos de HOMICIDIO AGRAVADO EN CONCURSO HEMOGÉNEO Y SUCESIVO, EN CONCURSO HETERÓGENEO CON FABRICACIÓN, TRÁFICO PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES AGRAVADO, además conforme las actividades investigativas y labores de campo e investigativas se pudieron establecer que los perpetradores del homicidio eran vigilantes del cañaduzal y el crimen obedeció a motivos de intolerancia.

Al hecho 2.2.31: No es un hecho en estricto sentido, lo consignado es una nota periodística efectuada a los familiares de los menores asesinados, publicada en “eltiempo.com.co”, que se publicó el 11 de agosto de 2021, sin que dicha nota periodística pueda considerarse como un hecho notorio.

Al hecho 2.2.32: No es un hecho en estricto sentido, lo consignado es un artículo publicado el 11 de junio de 2022, en la revista semana.com en la que se manifiesta que condenan a otro responsable de la masacre de cinco menores en Llano Verde.

Al hecho 2.2.33: Lo consignado en este numeral es una parte del preacuerdo suscrito por Juan Carlos Loaiza Ocampo con la Fiscalía General de la Nación, ello conforme a la prueba aportada con la demanda.

Al hecho 2.2.34: De conformidad con la prueba aportada con la demanda, lo indicado en este numeral consiste en apartes de la sentencia de primera instancia (Preacuerdo) No. 10, proferida por el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali el 11 de marzo de 2022, condenando a Juan Carlos Loaiza Ocampo.

Al hecho 2.2.35: De conformidad con la prueba aportada con la demanda, lo indicado en este numeral consiste en apartes de la sentencia de primera instancia (Preacuerdo) No. 30, proferida por el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali el 10 de junio de 2022, Condenando a Yeferson Marcial Ángulo Quiñones.

Al hecho 2.2.36: Lo consignado en este numeral al parecer es un extracto del reporte de iniciación –FPJ-1 de Policía Judicial de fecha 11 de agosto de 2020 del proceso judicial con número de noticia criminal 760016000193202006645.

Al hecho 2.2.37: Lo consignado en este numeral al parecer es un extracto del acta de inspección a lugares –FPJ-9 de Policía Judicial de fecha 12 de agosto de 2020 del proceso judicial con número de noticia criminal 760016000193202006645. Sin embargo se debe precisar que revisado los documentos aportados como pruebas por los demandante que puede visualizar esta la suscrita, no se encontró el acta FJP-9.

Al hecho 2.2.38: Lo consignado en este numeral alude a una nota periodística “eltiempo.com” publicó el día 16 de noviembre de 2020, en la que se hace referencia a la composición de una canción con ocasión a los hechos en los que murieron cinco jóvenes en el barrio Llano verde y también tiene apreciaciones subjetivas de los demandantes.

Al hecho 2.2.39: No es un hecho que sirva de fundamento fáctico al medio de control, sino que se trata de una entrevista efectuada a los compositores de una canción por el asesinato de los jóvenes de Llano verde.

Al hecho 2.2.40: No es un hecho, sino que es la transcripción de una canción.

Al hecho 2.2.41: No es un hecho, es una pretensión de la demanda, frente a la cual me pronunciare en el acápite respectivo.

Sin embargo, respecto a la supuesta omisión de las entidades demandadas, en lo referente al reproche endilgado al Distrito de Santiago de Cali es pertinente manifestar

que, si bien, la parte demandante pretende endilgar responsabilidad administrativa en contra del Distrito de Santiago de Cali arguyendo que le corresponde conforme lo establece el artículo 3 de la Ley 1551 de 2012; i) elaborar los planes de desarrollo Municipal incorporando las visiones de las organizaciones comunales y de los grupos de población vulnerables presentes en sus territorio, ii) elaborar e implementar los planes integrales de seguridad ciudadana, en coordinación con la autoridades locales de policía y promover la convivencia entre sus ciudadanos, así como conservar el orden público (art. 315 C.Pol), etc., pues tenía la posición de garante para evitar el resultado dañoso como es la muerte de los menores.

Al respecto, es pertinente manifestar que las estrategias y programas en materia de seguridad ciudadana, han venido siendo operativizadas a través de la gestión territorial desde la Secretaría de Seguridad y Justicia, la cuales se desprenden del plan de Desarrollo “Cali unidad por la Vida” 2020-2023, también se ha desarrollado mesas de seguridad vecinales con enfoque de prevención situacional de delito, acciones encaminadas a proteger la vida y fomentar la convivencia ciudadana.

A su vez, la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana- Subsecretaría de Derechos Humanos y Construcción por la Paz, dentro del plan de desarrollo, dentro del año 2020 ha implementado, línea “Distrito Reconciliado”, programa Derechos Humanos, Paz y Reconciliación”, realizando concretamente en el barrio Llano Verde campañas de prevención de las vulneraciones en los delitos de desaparición y trata de personas, talleres de promoción de Derechos humanos, entre otros, sin que se logre evidenciar la supuesta omisión en la que presuntamente incurrió el ente territorial demandante.

Puesto que el Distrito de Santiago de Cali, desplegó todas las acciones que se encontraban a su alcance. Así mismo, no se puede esperar que sea un asegurador universal, omnipresente.

Por otro lado, no puede dejarse de lado que los hechos fueron perpetrados por personas ajenas al Distrito de Santiago de Cali, configurándose el hecho determinante y exclusivo de un tercero, como lo fueron las tres personas que fueron condenadas penalmente por la ocurrencia de los hechos en los que perdieron la vida los menores en un cañaduzal.

Es así, que se itera que esta entidad territorial tampoco participó por acción ni por omisión, en la producción del daño, ni dichas circunstancias se encuentran acreditadas, por lo que no se configura responsabilidad alguna

Al hecho 2.2.42: No es un hecho, lo señalado por los demandantes hace alusión al título de imputación y a las pretensiones de la demanda.

Al hecho 2.2.43 y 2.2.44: Lo manifestado en estos numerales no constituye una base fáctica que fundamente las pretensiones del medio de control incoado por los actores, sino que constituye las actuaciones previas al agotamiento del requisito de procedibilidad,

como son, la radicación de la solicitud de conciliación, para la admisión de la misma por parte de la Procuraduría, para que la parte demandante pueda acceder a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

Al hecho 2.2.45: No es un hecho, lo indicado es un juicio de valoración e imputación que compete al Juez de lo Contencioso Administrativo, previo la acreditación de los elementos de la responsabilidad administrativa.

II. FRENTE A LAS DECLARACIONES Y CONDENAS:

Me opongo a la totalidad de las pretensiones incoadas en la demanda, por cuanto carecen de fundamentos fácticos y jurídicos que hagan viable su prosperidad, ya que no existe en el expediente prueba fehaciente que permita endilgar responsabilidad administrativa al Distrito Especial de Santiago de Cali, por cuanto dicha responsabilidad no ha nacido, habida cuenta que los supuestos hechos que sirven de base al presente medio de control, no cuentan con elementos de juicio que permitan atribuir responsabilidad administrativa en contra.

En efecto, además de la clara ausencia de elementos probatorios que permitan comprobar la supuesta falla en el servicio, entendida esta según lo indicado por los demandantes por la supuesta omisión del Distrito especial de Santiago de Cali en i) elaborar los planes de desarrollo Municipal incorporando las visiones de las organizaciones comunales y de los grupos de población vulnerables presentes en sus territorio, ii) elaborar e implementar los planes integrales de seguridad ciudadana , en coordinación con la autoridades locales de policía y promover la convivencia entre sus ciudadanos, así como conservar el orden público (art. 315 C. Pol), etc., pues tenía la posición de garante para evitar el resultado dañoso como es la muerte de los menores. Ahora, frente a las declaraciones individualmente consideradas, procedo a pronunciarme en detalle, así:

Frente a la pretensión 4.1: Me opongo a que se declare administrativa, patrimonial, solidaria y extracontractualmente responsable al Distrito Especial de Santiago de Cali por el daño antijurídico, así como de los consecuentes perjuicios materiales e inmateriales causados a los demandantes con ocasión de la muerte del menor de edad Leider Cárdenas Hurtado (Q.E.P.D.), el 11 de agosto de 2020, por cuanto no obra en el expediente prueba que permita atribuir la presunta falla en el servicio en cabeza del Distrito Especial de Santiago de Cali.

Frente a la pretensión 4.1.1: Me opongo a que se condene al Distrito Especial de Santiago de Cali al reconocimiento de perjuicios morales a favor de los demandantes, al no acreditarse la falla en el servicio que se pretende endilgar al Distrito Especial de Santiago de Cali.

Frente a la pretensión 4.2.1 Los perjuicios morales, si bien estos se refieren a la parte subjetiva e interna de la víctima que se traducen en una alteración disvaliosa de los estados del ánimo, quien los alegue debe demostrarlos mediante los medios pertinentes.

En esta medida, el juez solo puede otorgarlos teniendo en cuenta criterios de razonabilidad y racionalidad respecto a lo probado en el proceso. En este sentido, no basta simplemente con nombrar unas supuestas angustias o diferentes circunstancias para pretender indemnización por este concepto, sino que es menester probar mediante los medios idóneos dicha afirmación, así como la magnitud de la alteración del estado del ánimo.

Frente a la pretensión 4.2.2: Me opongo a que se condene al Distrito Especial de Santiago de Cali al reconocimiento del daño inmaterial por afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados a favor de los demandantes, al no acreditarse la falla en el servicio que se pretende endilgar al Distrito Especial de Santiago de Cali.

Frente a la pretensión 4.2.3: Me opongo al reconocimiento del daño a la salud deprecado por los demandantes, al no reunirse los requisitos esenciales para endilgar responsabilidad alguna en cabeza de los hoy demandados y en especial del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, no es viable imponer obligación indemnizatoria alguna por concepto a este perjuicio.

4. CONCEPTO Y REPARACIÓN DEL DAÑO A LA SALUD.

En los casos de reparación del daño a la salud se reiteran los criterios contenidos en la sentencia de unificación del 14 de septiembre de 2011, exp. 19031, proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, y se complementan los términos de acuerdo con la evolución jurisprudencial de la Sección Tercera.

La indemnización, en los términos del fallo referido *está sujeta a lo probado en el proceso, única y exclusivamente para la víctima directa, en cuantía que no podrá exceder de 100 S.M.L.M.V, de acuerdo con la gravedad de la lesión, debidamente motivada y razonada, conforme a la siguiente tabla:*

REPARACION DEL DAÑO A LA SALUD REGLA GENERAL	
Gravedad de lesión	Víctima directa
	S.M.L.M.V.
Igual o superior al 50%	100
Igual o superior al 40% e inferior al 50%	80
Igual o superior al 30% e inferior al 40%	60
Igual o superior al 20% e inferior al 30%	40
Igual o superior al 10% e inferior al 20%	20
Igual o superior al 1% e inferior al 10%	10

Bajo este propósito, el juez debe determinar el porcentaje de la gravedad o levedad de la afectación corporal o psicofísica, debidamente probada dentro del proceso, relativa a los aspectos o componentes funcionales, biológicos y psíquicos del ser humano.” (Sublínea ajena al texto)

Luego es claro que según la Jurisprudencia unificada del Consejo de Estado, en este caso, previa demostración de la responsabilidad alegada, este perjuicio se reconoce única y exclusivamente para la víctima directa y en los montos establecidos.

Frente a la pretensión 4.3: Me opongo a la prosperidad de esta pretensión por cuanto al no reunirse los requisitos esenciales para endilgar responsabilidad alguna en cabeza de los demandados, no hay lugar a condenar al pago de cualquier tipo de intereses.

Frente a la pretensión 4.4: Me opongo a la prosperidad de esta pretensión por cuanto al no reunirse los requisitos esenciales para endilgar responsabilidad alguna en cabeza de los demandados, no hay lugar a condenar al pago de costas y agencias en derecho.

Frente a la pretensión 4.5: Frente a esta pretensión debe indicarse al despacho que la misma no puede considerarse, por cuanto la misma se refiere al cumplimiento de las normas del C.P.A.C.A.

EXCEPCIONES DE MÉRITO FRENTE A LA DEMANDA

1. LA CAUSA EFICIENTE DEL DAÑO DEPRECADO POR LOS ACCIONANTES, CONSISTE EN EL HECHO EXCLUSIVO Y DETERMINANTE DE UN TERCERO, CONFORME A LO EVIDENCIADO EN LA INVESTIGACIÓN REALIZADA POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Del análisis efectuado sobre los documentos de la investigación penal aportados como prueba documental de la demanda, se tiene que según labores de vecindario, interceptaciones de llamadas, entrevistas, se demuestra fehacientemente que los hechos en los cuales falleció el menor Leider Cárdenas Hurtado (q.e.p.d.), fueron perpetrados por Yeferson Marcial Angulo Quiñones, Juan Carlos Loaiza Ocampo y Gabriel Alejandro Bejarano quienes fueron condenados por los delitos de HOMICIDIO AGRAVADO EN CONCURSO HEMOGÉNEO Y SUCESIVO, EN CONCURSO HETERÓGENEO CON FABRICACIÓN, TRÁFICO PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES AGRAVADO, se reitera que, conforme las actividades investigativas y labores de campo e investigativas se pudo establecer que los perpetradores del homicidio eran vigilantes del cañaduzal y el crimen obedeció a motivos de intolerancia, pues de las declaraciones rendidas por los condenados dentro del proceso penal se vislumbra que la muerte del menor, se ocasionó debido a que el menor junto con otros cuatro jóvenes, irrumpieron en un predio privado sin tener autorización para ingresar al mismo, el cual contaba con vigilancia privada, quienes, conforme a lo relatado en las declaraciones, los cuales fueron sorprendidos por los condenados y

conforme se señala en el preacuerdo *“quienes mediando acuerdo previo se asignaron roles, se distribuyeron tareas, se hicieron aportes esenciales que se ejecutaron y consumaron, pues fueron perseguidos, encerrados, sometidos, puestos en condiciones de indefensión al hacerlos arrodillar y ejecutarlos con arma de fuego, donde el señor JUAN CARLOS LOAIZA OCAMPO, JEFERSON MARCIAL ANGULO, a doblegar bajo amenazas con arma de fuego la voluntad de los menores, ejecutándose el homicidio (...)”* así las cosas, los documentos aportados permiten avizorar elementos que dan cuenta de que la conducta reseñada como causante del daño, fue ejercida por JUAN CARLOS LOAIZA OCAMPO, JEFERSON MARCIAL ANGULO, GABRIEL BEJARANO, quienes prestaban su servicio en el cañaduzal, , quien en el caso de estudio fungen como un terceros, completamente ajeno a las entidades aquí demandadas. Puesto que los referenciados no tienen ningún vínculo legal o contractual con el hoy Distrito especial de Santiago de Cali.

Aunado a lo anterior, en la prueba 13 carpeta Yeferson Ángulo, se puede inferir a partir del análisis de los elementos entregados, que había un reconocimiento previo de la víctima, teniendo en cuenta que las entrevistas que se efectuaron, donde presuntamente otros niños y adolescentes fueron víctimas de amenazas por parte de hombres con armas de fuego, donde se relaciona que fueron comparados con fotografías, como si estuvieran buscando a alguna persona en específico, a partir del testimonio recopilado en entrevista de fecha de 22 de agosto de 2020, donde la señora Laura valentina Mena Osorio, relaciona que en dicho lugar estaban buscando al parecer a alguien que estaba realizando hurtos.

Además, es importante resaltar, por lo que se transcribe literalmente *“Ya nosotros asustados dijimos que no fuéramos a comentar eso a nadie y que dejáramos así, y cada quien cogió para su casa y de mi parte nunca volví por esos lados ni por el jarillón me gusta pasar”*

Ahora bien, para dilucidar la prosperidad de esta excepción, el H. Consejo de Estado ha establecido tres criterios fundamentales que dejan entrever el hecho del tercero, como una causa extraña a los demandados, por lo cual deberá exonerárseles de toda responsabilidad, como a continuación cito:

*“(i) **Que sea la causa exclusiva del daño.** Si tanto el tercero como la entidad estatal concurrieron en la producción del daño, el resultado no sería la exoneración de responsabilidad, sino la existencia de solidaridad de éstos frente al perjudicado, en los términos del artículo 2344 del Código Civil, lo cual le daría derecho al perjudicado para reclamar de cualquiera de los responsables la totalidad de la indemnización, aunque quien paga se subroga en los derechos del afectado para pretender del otro responsable la devolución de lo que proporcionalmente le corresponda pagar, en la medida de su intervención²⁶.*

*(ii) **Que el hecho del tercero sea completamente ajeno al servicio, en el entendido de que ese tercero sea externo a la entidad, es decir, no se encuentre dentro***

de su esfera jurídica y, además, que la actuación de ese tercero no se encuentre de ninguna manera vinculada con el servicio, porque si el hecho del tercero ha sido provocado por una actuación u omisión de la entidad demandada, dicha actuación será la verdadera causa del daño y, por ende, el hecho del tercero no será ajeno al demandado.

*(iii) **Que la actuación del tercero sea imprevisible e irresistible a la entidad;** porque, de lo contrario, el daño le sería imputable a ésta a título de falla del servicio en el entendido de que la entidad teniendo el deber legal de hacerlo, no previno o resistió el suceso. Como lo advierte la doctrina, “sólo cuando el acontecimiento sobrevenido ha constituido un obstáculo insuperable para la ejecución de la obligación, deja la inejecución de comprometer la responsabilidad del deudor”.*

(...)

Para que el hecho del tercero constituya causa extraña y excluya la responsabilidad de la entidad demandada no se requiere ni que aparezca plenamente identificado en el proceso ni que el tercero hubiere actuado con culpa, porque la relación causal es un aspecto de carácter objetivo. Lo determinante en todo caso es establecer que el hecho del tercero fue imprevisible e irresistible para la entidad demandada, y que su actuación no tuvo ningún vínculo con el servicio, amén de haber constituido la causa exclusiva del daño.” ⁴

Así entonces, se encuentran configurados los requisitos señalados por el H. Consejo de Estado para que se estructure la causa extraña por el hecho de un tercero, como quiera los condenados por el homicidio del menor Leider Cárdenas Hurtado son personas completamente ajenas al Distrito especial de Santiago de Cali, quien no ostenta vínculo alguno con ellos y finalmente, hago especial énfasis que los hechos fueron imprevisibles e irresistibles pues a estos no se podía anticipar que los menores ingresarían a un predio privado, sin ninguna autorización ni mucho menos que los vigilantes del cañaduzal perpetrarían el homicidio, máxime cuando no se puso en conocimiento del Distrito de Cali de situaciones sospechosas por dicho sector, puesto que el Distrito no puede realizar actuaciones en predios privados, pues de ser así, vulneraría el derecho a la propiedad privada contenido en el artículo 58 de la Constitución Política.

Por lo tanto, no es posible imponer una condena y ordenar el resarcimiento de un detrimento por perjuicios no causados por el Distrito de Santiago de Cali, ya que no es admisible la presunción en esa materia, de manera que de una indemnización sin fundamentos fácticos ni jurídicos, necesariamente se traducirá en un lucro indebido, como sucedería en un caso como el que nos ocupa, sin que se acredite la supuesta falla en el servicio del Distrito, resultando más contundente la demostración del hecho de un tercero que exonera de responsabilidad, como fueron los actos de intolerancia de los tres condenados por el Homicidio del menor Leider Cárdenas Hurtado.

Ruego declarar probada esta excepción.

2. INEXISTENCIA DE NEXO DE CAUSALIDAD QUE PERMITA ACREDITAR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN CONTRA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

El artículo 90 Constitucional, establece una cláusula general de responsabilidad del Estado, en virtud de la cual éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, de lo que se desprende que para declarar responsabilidad estatal se requiere la concurrencia de estos presupuestos: (i) la existencia de un daño antijurídico, (ii) que ese daño antijurídico le sea imputable a la entidad pública, bajo cualquiera de los títulos de atribución de responsabilidad, la falla del servicio, el daño especial, el riesgo excepcional, etc. y (iii) la existencia de un nexo de causalidad entre los dos.

Y es que la formulación de las pretensiones de la parte actora y el marco fáctico alegado, colocan su causa dentro del régimen de responsabilidad estatal de la falla probada del servicio, régimen en el cual es menester acreditar la ocurrencia de la falla o falta, atribuible a una entidad pública, el perjuicio o daño antijurídico sufrido por un tercero y el nexo causal entre dicha falla o falta y el perjuicio o daño antijurídico sufrido por un tercero, de suerte que para estructurar la responsabilidad estatal, y obtener la declaración judicial de responsabilidad administrativa extracontractual y por ende la condenas consecuenciales, es necesario que se acrediten los tres elementos que integran dicho régimen.

Se observa que dentro del presente proceso ello no ocurrió así, pues si bien se acreditó que la supuesta omisión que se endilga al Distrito especial de Santiago de Cali hubiese sido la causa eficiente del daño, no se acreditó que el mismo ocurriera por una falla en el servicio imputable al Municipio de Santiago de Cali, todo esto atendiendo a las pruebas obrantes en el plenario.

Así las cosas, al no acreditarse la existencia de la falla del servicio, no hay lugar a declarar administrativamente responsable al Distrito de Santiago de Cali por el daño supuestamente padecido por la parte demandante, razón por la cual no es procedente un pronunciamiento favorable a las pretensiones de los actores.

3. FALTA DE DEBER OBJETIVO DE CUIDADO DE LOS PADRES DEL MENOR

El artículo 2347 del Código Civil establece: “...Toda persona es responsable, no sólo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado... Así, los padres son responsables solidariamente del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa...” (Subrayas fuera del texto).

Teniendo en cuenta la citada norma, de acuerdo con el deber de cuidado que ostentan los padres sobre sus hijos, la madre de la víctima, tenía la obligación la obligación de

supervisar al menor, y de haber sido más cautelosos en esa labor de vigilar a el niño, perfectamente se hubiese podido evitar su muerte.

La Corte Constitucional respecto al cuidado personal de los hijos ha precisado:

“...esta Sala considera que los padres por el hecho de serlo asumen frente a sus hijos una serie de derechos y obligaciones, los cuales se derivan de la llamada autoridad paterna y de la patria potestad. Estos derechos deben ejercerlos conjuntamente los padres, y a falta de uno de ellos le corresponderá al otro. Excepcionalmente, los derechos que conforman la autoridad paterna pueden ser ejercidos por un pariente o por un tercero, según las circunstancias del caso y con ciertos límites. No así la patria potestad, reservada a los padres.

En ese conjunto de derechos que conforman la autoridad paterna, está el cuidado personal del hijo, que consiste, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en "el oficio o función, mediante la cual se tiene poder para criar, educar, orientar, conducir, formar hábitos y disciplinar la conducta, siempre con la mira puesta en el filio, en el educando, en el incapaz de obrar o de autorregular en forma independiente su comportamiento." (Cfr. Corte Suprema de Justicia, Magistrado Ponente. Dr. José Alejandro Bonivento Fernández, marzo 10 de 1987).

Es decir, si la madre hubiera estado a su cuidado, no lo hubiera dejado tomar esos riesgos, faltando con ello al deber de cuidado, crianza y atención conforme a lo contenido en el artículo 23 de la Ley 1098 de 2006.

4. INEXISTENCIA DE NEXO DE CAUSALIDA QUE PERMITA ACREDITAR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN CONTRA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

De las pruebas obrantes en el plenario se evidencia que en el presente asunto no se configuran los elementos que permitan acreditar la falla en el servicio del Distrito de Santiago de Cali, pues, si bien con el registro de defunción del menor Leider Cárdenas Hurtado (q.e.p.d.) se acredita la existencia del daño contrario sensu no se evidencia el nexo de causalidad.

Si bien la parte demandante pretende endilgar responsabilidad administrativa por la muerte del menor, fincando sus pretensiones en la supuesta omisión del Distrito Especial de Santiago de Cali en la elaboración de planes integrales de seguridad, elaborar Planes de Desarrollo Municipal. Sin embargo, pasa por alto la parte demandante que el Distrito ha elaborado e implementado estrategias y programas en materia de seguridad ciudadana, las han venido siendo operativizadas a través de la gestión territorial desde la Secretaría de Seguridad y Justicia, la cuales se desprenden del plan de Desarrollo “Cali unidad por la Vida” 2020-2023, también se ha desarrollado mesas de seguridad vecinales con enfoque de prevención situacional de delito, acciones encaminadas a

proteger la vida y fomentar la convivencia ciudadana.

A su vez, la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana- Subsecretaría de Derechos Humanos y Construcción por la Paz, dentro del plan de desarrollo, dentro del año 2020 ha implementado, línea “Distrito Reconciliado”, programa Derechos Humanos, Paz y Reconciliación”, realizando concretamente en el barrio Llano Verde campañas de prevención de las vulneraciones en los delitos de desaparición y trata de personas, talleres de promoción de Derechos humanos, entre otros, sin que se logre evidenciar la supuesta omisión en la que presuntamente incurrió el ente territorial demandante.

Corolario de lo anterior, las manifestaciones contenidas en la demanda y las pruebas aportadas, no resulta suficiente para acreditar la existencia del nexo de causalidad.

El nexo causal se entiende como la relación necesaria y eficiente entre el hecho generador del daño y el daño probado. La jurisprudencia y la doctrina indican que para poder atribuir un resultado a una persona y declararla responsable como consecuencia de su acción u omisión, es indispensable definir si aquél aparece ligado a ésta por una relación de causa-efecto. Si no es posible encontrar esa relación mencionada, no tendrá sentido alguno continuar el juicio de responsabilidad.

Así mismo, el Consejo de Estado ha establecido que el nexo de causalidad deber ser probado por el demandante, independientemente el régimen aplicable, ya sea el régimen objetivo o subjetivo, ello por cuanto el nexo de causalidad es un elemento autónomo al daño y no admite, ninguna presunción como si lo admite la culpa o la falla, razón por la cual, se reitera el mismo debe acreditarse fehacientemente, lo que no ocurrió en el presente asunto, de modo que si no se prueba la verdadera causa que desencadenó el hecho dañoso, no es posible atribuir responsabilidad al demandado. Por ello para que la pretensión de responsabilidad prospere es necesario que el demandante acredite el daño y ese resultado tuvo por causa directa y adecuada la conducta que se le imputa al demandado.

Por el contrario, de las pruebas obrantes en el proceso, se evidencia que la causa eficiente de los hechos fue la conducta de intolerancia ejecutada por Yeferson Marcial Angulo Quiñones, Juan Carlos Loaiza Ocampo y Gabriel Alejandro Bejarano, quienes según labores investigativas efectuadas por la Fiscalía General de la Nación eran trabajadores de Cañaduzal y al parecer, como se desprende de las entrevistas realizadas estarían buscando a unas personas que supuestamente estaban cometiendo hurtos por el cañaduzal.

Los señores, Yeferson Marcial Angulo Quiñones, Juan Carlos Loaiza Ocampo y Gabriel Alejandro Bejarano, fueron condenados por los delitos de HOMICIDIO AGRAVADO EN CONCURSO HEMOGÉNEO Y SUCESIVO, EN CONCURSO HETERÓGENEO CON FABRICACIÓN, TRÁFICO PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES AGRAVADO, se reitera que, conforme las

actividades investigativas y labores de campo e investigativas se pudo establecer que los perpetradores del homicidio eran vigilantes del cañaduzal y el crimen obedeció a motivos de intolerancia, pues de las declaraciones rendidas por los condenados dentro del proceso penal. Así, se vislumbra que la muerte de Leider Cárdenas Hurtado, infortunadamente acaeció debido a que el menor junto con otros cuatro jóvenes, irrumpieron en un predio privado sin tener autorización para ingresar al mismo, encontrándose con la intolerancia de los tres condenados, constituyéndose dicho actuar la causa eficiente del daño, pues estos, conforme se señala en el preacuerdo firmado con la Fiscalía General de la Nación quienes *“mediando acuerdo previo se asignaron roles, se distribuyeron tareas, se hicieron aportes esenciales que se ejecutaron y consumaron, pues fueron perseguidos, encerrados, sometidos, puestos en condiciones de indefensión al hacerlos arrodillar y ejecutarlos con arma de fuego, donde el señor JUAN CARLOS LOAIZA OCAMPO, JEFERSON MARCIAL ANGULO, a doblar bajo amenazas con arma de fuego la voluntad de los menores, ejecutándose el homicidio (...)”* Situación que no podía ser de conocimiento del Distrito, máxime cuando no se puso en conocimiento alguna actitud sospechosa en el cañaduzal.

5. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO: “NADIE ESTÁ OBLIGADO A LO IMPOSIBLE”, EN ESTE CASO POR LA IMPOSIBILIDAD DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI PARA EVITAR LA MUERTE DEL MENOR LEIDER CARDENAS HURTADO (Q.E.P.D.)

En este acápite se analizará el principio universal del derecho *Adimposibiliam nemo temetur*, cuya traducción es que nadie está obligado a lo imposible. Pues bien, ha sido vasta la jurisprudencia y doctrina que se ha proferido sobre este tema.

La Sala ha considerado que, a pesar de que es deber del Estado brindar y seguridad y protección a todas las personas residentes en el país, no le son imputables todos los daños causados por terceros a la vida o a los bienes, porque las obligaciones del Estado son relativas, en tanto limitadas por las capacidades establecidas en cada caso concreto, ya que nadie está obligado a lo imposible.

Respecto de la previsibilidad de la Administración en la producción de un hecho dañoso y la falta de adopción de las medidas necesarias para evitarlo, la Sala ha precisado: *“No es el Estado un asegurador general, (sic) obligado a reparar todo daño, (sic) en toda circunstancia, pues la administración de justicia debe observar la ley sustantiva, consultar la jurisprudencia e inspirarse en la equidad, para aplicar los principios de derecho y fundamentar las decisiones en las diversas tesis sobre los (sic) cuales se edifica y sirven de razón a la imputación del deber reparador. Así (sic) en el caso presente, (sic) la relatividad del servicio debe entenderse en cuanto no era exorbitante disponer, porque existían elementos materiales y humanos para una misión debida. Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías y de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no*

pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe todo cuanto está a su alcance”²

Así las cosas, de conformidad con el extracto jurisprudencial en cita y una vez cotejados los elementos probatorios reunidos en el presente caso, no hay lugar a dudas de que: existieron circunstancias que imposibilitaron que el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI pudiera salvar la vida del menor Leider Cárdenas Hurtado, pues resultaba imposible conocer que el menor y otros cuatro jóvenes el día de los hechos irrumpirían en un predio privado, máxime cuando la ciudad se encontraba en aislamiento preventivo obligatorio por el Covid – 19, siendo este un comportamiento inesperado. Tampoco se tuvo conocimiento del algún actuar delictivo o intimidatorio por parte de los vigilantes del cañaduzal.

Por todo lo anterior solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

6. INEXISTENCIA DE LA SUPUESTA FALLA EN EL SERVICIO – OMISIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI ENDILGADA POR LOS DEMANDANTES

Sobre el particular, cabe precisar que, como ya es de amplio conocimiento, para que exista responsabilidad del Estado, deberá existir una acción u omisión que infiera daño a otro, así como una relación de causalidad entre estos dos últimos. Dicho esto, los aquí demandados, sólo podrán considerarse responsables, en el evento de ser probado que ejercieron u omitieron negligentemente una conducta frente a los hechos en que murió el menor Leider Cárdenas Hurtado (q.e.p.d.) y que la misma, fue la causa de que se generara el daño alegado por los demandantes.

En ese orden de ideas, se hace necesario delimitar para el caso concreto cada uno de los elementos mencionados, así:

Daño: De los supuestos fácticos esbozados en el libelo inicial, se tiene que el daño causado a los demandantes, consiste en la muerte del menor Leider Cárdenas Hurtado (q.e.p.d.) acaecida el 11 de agosto de 2020 en un cañaduzal predio privado -barrio Llano Verde.

Conducta generadora del daño: Del relato consignado en el escrito de demanda, se tiene que la presunta actuación antijurídica endilgada al Distrito Especial de Santiago de Cali es la supuesta omisión de las entidades demandadas, en lo referente al reproche endilgado al Distrito de Santiago de Cali es pertinente manifestar que , si bien, la parte demandante pretende endilgar responsabilidad administrativa en contra del Distrito de Santiago de Cali arguyendo que le corresponde conforme lo establece el artículo 3 de la Ley 1551 de 2012; i) elaborar los planes de desarrollo Municipal incorporando las visiones

² Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de febrero de 1996, expediente 9940

de las organizaciones comunales y de los grupos de población vulnerables presentes en sus territorio, ii) elaborar e implementar los planes integrales de seguridad ciudadana , en coordinación con la autoridades locales de policía y promover la convivencia entre sus ciudadanos, así como conservar el orden público (art. 315 C.Pol.), etc., pues tenía la posición de garante para evitar el resultado dañoso como es la muerte de los menores.

Al respecto de la omisión citada, sea lo primero indicar que las estrategias y programas en materia de seguridad ciudadana, han venido siendo operativizadas a través de la gestión territorial desde la Secretaría de Seguridad y Justicia, la cuales se desprenden del plan de Desarrollo “Cali unidad por la Vida” 2020-2023, también se ha desarrollado mesas de seguridad vecinales con enfoque de prevención situacional de delito, acciones encaminadas a proteger la vida y fomentar la convivencia ciudadana.






A su vez, la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana- Subsecretaría de Derechos Humanos y Construcción por la Paz, dentro del plan de desarrollo, dentro del año 2020 ha implementad, línea “Distrito Reconciliado”, programa Derechos Humanos, Paz y Reconciliación”, realizando concretamente en el barrio Llano Verde campañas dprevención de las vulneraciones en los delitos de desaparición y trata de personas, talleres de promoción de Derechos humanos, entre otros, sin que se logre evidenciar la supuesta omisión en la que presuntamente incurrió el ente territorial demandante.

Al respecto, es pertinente manifestar que las estrategias y programas en materia de seguridad ciudadana, han venido siendo operativizadas a través de la gestión territorial desde la Secretaría de Seguridad y Justicia, la cuales se desprenden del plan de Desarrollo “Cali unidad por la Vida” 2020-2023, también se ha desarrollado mesas de seguridad vecinales con enfoque de prevención situacional de delito, acciones encaminadas a proteger la vida y fomentar la convivencia ciudadana.

A su vez, la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana- Subsecretaría de Derechos Humanos y Construcción por la Paz, dentro del plan de desarrollo, dentro del año 2020 ha implementad, línea “Distrito Reconciliado”, programa Derechos Humanos, Paz y Reconciliación”, realizando concretamente en el barrio Llano Verde campañas de prevención de las vulneraciones en los delitos de desaparición y trata de personas, talleres de promoción de Derechos humanos, entre otros, sin que se logre evidenciar la supuesta omisión en la que presuntamente incurrió el ente territorial demandante.

Ahora bien, respecto a elaborar los planes de desarrollo Municipal incorporando las visiones de las organizaciones comunales y de los grupos de población vulnerables presentes en sus territorios, es pertinente manifestar que la actual Administración Municipal formuló el Plan de Desarrollo 2020-2023 del Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empre4sarial y de Servicios de Santiago de Cali “CALI UNIDA POR LA VIDA”, en dicho plan de desarrollo se establecieron las siguientes líneas: 201 Línea Estratégica: Distrito Reconciliado, programa 201001: Derechos Humanos, Paz y

Reconciliación.³

Indicadores de Producto							
Área Funcional	Indicador de Producto	Unidad de Medida	Línea Base 2019	Meta	Organismo Responsable	ODS	Articulación con otros Instrumentos
52010010001	Política pública de Derechos Humanos formulada, aprobada y adoptada	Número	0	1	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana		I.B. 52029
52010010002	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes sensibilizados para la prevención de los delitos de desaparición, trata, reclutamiento forzado, uso y utilización de menores	Número	600	3.000	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana		I.B. 52029 PP Primera Infancia, Infancia, Adolescencia
52010010003	Personas que participan en la promoción y protección de Derechos Humanos, la naturaleza, los seres sintientes y la prevención de sus vulneraciones	Número	4.240	8.240	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana		I.B. 52029 PP Primera Infancia, Infancia, Adolescencia
52010010004	Espacios de diálogo, reconciliación, construcción de paz y Cuidado de la Casa Común creados	Número	26	272	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana		I.B. 52029 PP Participación
52010010005	Personas en proceso de reincorporación, reintegración, desvinculados del conflicto armado con orientación social, política y comunitaria	Número	411	1.011	Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana		I.B. 52029

Programa 201003: “Programa Seguridad y Lucha del Delito”

52010030006	Mesas de seguridad vecinales con enfoque de prevención situacional del delito operando	Número	0	60	Secretaría de Seguridad y Justicia		I.B. 52013 pp Juventudes
52010030007	Sistemas de monitoreo y alerta del delito implementado	Número	1.946	2.946	Secretaría de Seguridad y Justicia		PDCC I.B. 52013 PP Seguridad y Convivencia Ciudadana
52010030008	Entornos de las Instituciones Educativas intervenidos con estrategia intersectorial de erradicación del microtráfico	Número	0	45	Secretaría de Seguridad y Justicia		I.B. 52017 PP Seguridad y Convivencia Ciudadana

Ahora bien, respecto a elaborar e implementar los planes integrales de seguridad ciudadana, en coordinación con la autoridades locales de policía y promover la convivencia entre sus ciudadanos, así como conservar el orden público, encontramos el Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana 2020-2023 el cual fue elaborado bajo una metodología participativa que incluyó tanto a la Institucionalidad local, regional y nacional, así como a la comunidad como actor protagónico.

Aunado a lo anterior, respecto a las acciones realizadas respecto a la Alerta Temprana No. 085 de 2018, mediante Oficio No. 202141610400004951 del 16 de abril de 202- dando respuesta a la personería Distrital de Santiago de Cali respecto de Llano Verde.

Durante los meses de enero a Julio de 2020, la Secretaría de Seguridad y Justicia desde

³ Pág. Plan de Desarrollo 2020-2023 “CALI UNIDA POR LA VIDA

su capacidad instalada y poder de articulación estuvo volcada en territorio a atender el contexto de la emergencia sanitaria provocada por la propagación del COVID-19. Es a partir del mes de agosto del mismo año que se robustece el equipo de Prevención Situacional del Delito y se empieza a priorizar comunas y barrios con mayor incidencia delictiva desde los diferentes ecosistemas de la ciudad. Cabe destacar que los requerimientos relacionados sobre Llano Verde son atendidos por el ecosistema 4 que Ecosistema 4 que tiene presencia en las comunas 13, 14, 15 y 21 con un enfoque de prevención del delito.

Cabe destacar que las acciones de gestión territorial de la Secretaría de Seguridad corresponden a una estrategia integral de prevención y control del delito y violencia en el sentido que no hay una destinación de un rubro para un territorio, comunidad o barrio en especial. Sin embargo, desde nuestro Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Convivencia (PISCC) se priorizan ciertos territorios y de acuerdo con ello se establecen estrategias y programas de reducción de violencia que permite focalizar y ofrecer un portafolio de soluciones. Por esta razón, nuestros equipos de Prevención Situacional del Delito y Perla enfocado en la prevención social de la violencia juvenil se encuentran articulados en Llano Verde.

(...)

El 11 de septiembre se apoyó y acompañó la actividad "Llano Verde territorio de verdad" en donde se realizaron diferentes muestras y expresiones culturales y artísticas. Desde la Secretaria de Seguridad y Justicia se apoyó con la intervención de limpieza, recuperación de espacios y olla comunitaria. Así mismo, en articulación con la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana se participó el evento "Paz al barrio" el 24 de septiembre; actividad en donde se dio a conocer la oferta interinstitucional en el barrio Llano Verde en la que el programa de Prevención Situacional del Delito dio a conocer el programa y atendió requerimientos ciudadanos de la comunidad.

En Oficio 202041610400013271 del 25 de agosto de 2020, Respuesta Solicitud Alerta Temprana AT-085/2018, Procuraduría Regional, en la que indicó:

“ La Alcaldía de Santiago de Cali a través de la Secretaría de Seguridad y Justicia está coordinando los programas y estrategias en materia de seguridad ciudadana con el objetivo de reducir los indicadores en materia de violencia homicida, prevención y control del delito, especialmente en aquellos territorios donde hay mayor presencia de la criminalidad en la ciudad. Sobre lo particular y con ocasión a la emisión de la Alerta Temprana 085-2018 por parte de la Defensoría del Pueblo, la administración del alcalde Jorge Iván Ospina está haciendo lo necesario para velar

por la vida, seguridad y propiedad de los habitantes y comunidades de las comunas 14, 15 y 21. En este sentido, nuestro Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Convivencia (PISCC) existe una sinergia y coordinación en territorio con la fuerza pública mediante nuestro Sistema Institucional de Seguridad (SIS)¹. Adicional a esto, nuestro PISCC como instrumento estratégico fue deliberado y coordinado junto con la Gobernación del Valle y aprobado con un amplio consenso por los organismos de seguridad y justicia del Comité Territorial de Orden Público (CTOP)."

Por otro lado, respecto a la instalación de cámaras de vigilancia en la Comuna 15 a la cual pertenece el Barrio Llano Verde, se respondió que de acuerdo con el equipo técnico de apoyo a la supervisión al contrato del sistema de videovigilancia de la ciudad de la Secretaría de Seguridad y Justicia, hay actualmente 104 cámaras en la Comuna 14; 109 cámaras en la Comuna 15 y 97 cámaras en la Comuna 21.

Nótese que el Distrito de Santiago de Cali, formuló el Plan de Desarrollo Distrital "Cali Unida por la Vida", estableciéndose líneas, programas, estrategias y proyectos movilizadores tanto en materia de seguridad ciudadana, como en promoción de derechos humanos, desplegando las acciones pertinentes y necesarias, como se da cuenta en los diferentes oficios que se aportan como prueba en esta contestación de la demanda, en los cuales se relacionan las acciones y estrategias que se han venido realizando en la ciudad de Cali y en especial en la comuna 15 – Barrio Llano Verde.

Así las cosas, no existen en el expediente pruebas que demuestren con claridad y certeza el Distrito de Cali haya incurrido en falla en el servicio por no haber evitado la muerte del menor Leider Cárdenas Hurtado (q.e.p.d.), pues se reitera, nada indicaba que los trabajadores del cañaduzal perpetrarían los homicidios de los menores de Llano Verde, por tanto, ha de concluirse que, en este caso, el daño alegado por los demandantes no devino de una conducta omisiva, descuidada o negligente y, en efecto, reprochable del Distrito de Cali, sino que fue el resultado de la actuación delincuencial y deliberado de Yeferson Marcial Angulo Quiñones, Juan Carlos Loaiza Ocampo y Gabriel Alejandro Bejarano, lo cual se traduce en un acto malintencionado de un tercero y esto hace inviable, por supuesto, tener por probada la existencia de una falla en la prestación del servicio. Razón por lo cual, no puede comprometerse la responsabilidad del Distrito de Cali, a título de falla del servicio, por cuanto la muerte de Leider Cárdenas (q.e.p.d.) no fueron consecuencia de una acción ni de una omisión del ente territorial que es mi poderdante.

Siendo así las cosas, se debe reiterar que el Distrito de Cali no tenía que sospechar ni había sido informado de situaciones extrañas que estuvieran ocurriendo en el cañaduzal, que ameritaran una actuación particular por parte de las fuerzas militares y de policía.

No obstante lo anterior, analizados los elementos aportados en la demanda, no se logra vislumbrar la supuesta omisión en la protección a la población civil, por cuanto

En mérito de lo expuesto, ante la inexistencia de una conducta antijurídica radicada en cabeza del extremo pasivo, solicito desde ya, se exonere de toda responsabilidad al Distrito Especial de Santiago de Cali, profiriendo sentencia favorable a sus intereses.

Finalmente, respectó a las políticas, planes, programas, proyectos o estrategia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que el Distrito Especial de Santiago de Cali ha implementado. Así mismo, las acciones que se han realizado las medidas de atención y de prevención adoptadas para el Barrio Llano Verde con anterioridad al 11 de agosto de 2020, la Subsecretaría de Derechos Humanos y Construcción por la Paz, mediante comunicación oficial No. 202241640300001784 del 21 de septiembre de 2022, señaló:

“Sobre políticas, planes, programas, proyectos o estrategia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que el Distrito Especial de Santiago de Cali ha implementado durante 2020, me permito referir los siguientes proyectos de inversión, enmarcados dentro Plan de Desarrollo 2020-2023 “Cali, solidaria por la vida”, línea “Distrito Reconciliado”, programa “Derechos Humanos, Paz y Reconciliación

Proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Indicador de resultado del proyecto (Descripción)	Valor Indicador de resultado del proyecto	Meta de producto del proyecto (Descripción)
Consolidación de una Política pública de Derechos Humanos en Santiago de Cali	BP-26002628		1	
	BP- 26002628A	Documento de Política pública de DDHH para Santiago de Cali Formulada y Aprobada	1	Definir un documentos de lineamientos de Política Publica para articular acciones orientadas a la protección y garantía de Derechos Humanos
	BP- 26002628B			Capacitar a 50 personas en temas de derechos humanos
	BP- 26002628C			Realizar 2 Instancias territoriales de coordinación institucional entre la sociedad civil, las organizaciones sociales, otros actores y la Administración de Santiago de Cali
Contribución a la disminución de las violaciones y vulneraciones de los derechos humanos en Santiago de Cali	BP-26001422		1.000	
	BP-26001422A	Personas que participan de la estrategia de derechos humanos y prevención de la trata de personas	600	Generar espacios de participación para la garantía de derechos humanos con la participación de 700 personas.
	BP-26001422B			Concertar 12 acciones concertadas de prevención y promoción en DDHH entre la alcaldía y la sociedad civil y organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos
	BP-26001422C	Personas que participan de la estrategia de derechos humanos y prevención de la trata de personas	400	Crear espacios de formación en derechos humanos para la participación de 400 personas
	BP-26001422D			Implementar el 100% de las estrategias para la transversalización del enfoque de derechos humanos para la promoción de mecanismos de defensa y protección de los derechos humano
	BP-26001422E			Realizar 1 evento de reconocimiento de la labor de los líderes sociales defensores de derechos humanos
	BP-26001422F			Atender el 100% de las Víctimas del delito de trata de personas
Implementación de acciones para la reintegración y reincorporación social, económica y comunitaria en	BP-26001425			
	BP-26001425A			Realizar 14 acciones comunitarias que promuevan la construcción de paz y la reconciliación

Calle 14N No. 6N-23 Edificio San Marino Oficina 502 Teléfonos 661 8707 – 661 8848
www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA Santiago de Cali				
	BP-26001425B			Generar escenarios pedagógicos que promuevan la reconciliación, el respeto a la igualdad y la no discriminación para 600 personas
	BP-26001425C			Establecer 10 articulaciones interinstitucionales para la generación de oportunidades locales
	BP-26001425D			Realizar el seguimiento a las oportunidades locales generadas
	BP-26001425E			Brindar asistencia funeraria para 100% de los casos de fallecimiento de personas reincorporadas en el marco del acuerdo de paz
Divulgación de la pedagogía de la memoria histórica y la reconciliación en Cali	BP-26001424		1	
	BP-26001424A	Escenario para la comprensión y reconocimiento acerca de las afectaciones del Conflicto armado en Cali	1	Implementar 1 Plan de activación de la Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación
	BP-26001424B			Implementar 2 acciones para el posicionamiento de la Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación en la ciudad
Desarrollo de acciones para la implementación del plan de paz y cultura ciudadana en Santiago de Cali	BP-26001426			
	BP-26001426A			Consolidar 16 alianzas para la construcción de paz y cultura ciudadana en la ciudad
	BP-26001426B			Desarrollar 3 espacios de participación con la ciudadanía para la paz y la cultura ciudadana.
	BP-26001426C			Realizar 1 campaña masiva de cultura ciudadana para la paz
	BP-26001426D	Plan de paz y convivencia pacífica implementado		Desarrollar 24 acciones para la promoción de la paz y cultura ciudadana en los territorios priorizados de la ciudad
Fortalecimiento de la justicia de paz para la resolución de conflictos en Santiago de Cali	BP-26001370			
	BP-26001370A			Realizar 26 procesos de socialización y promoción de la Justicia de Paz en comunas y corregimientos
	BP-26001370B			Establecer 10 alianzas para el desarrollo de la justicia de paz en Cali
Fortalecimiento de habilidades	BP-26001379		1.518	

Calle 14N No. 6N-23 Edificio San Marino Oficina 502 Teléfonos 661 8707 – 661 8848
www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

SECRETARÍA DE PAZ
Y CULTURA CIUDADANA

para tramitar los conflictos pacíficamente mediante laboratorios de paz en Santiago de Cali	BP-26001379A	Personas formadas en cultura ciudadana para la paz, la convivencia y la reconciliación	720	Formar 900 personas en pautas de crianza, con perspectiva de género en prevención de violencias y reconciliación
	BP-26001379B		342	sensibilizar 400 NNAJ en el reconocimiento del imaginario de paz y la prevención de uso y utilización.
	BP-26001379C		456	Formar 640 personas en cultura de paz y estrategias de convivencia en jóvenes en riesgo
	BP-26001379D			Constituir 1 red de paz integrada por diferentes actores del Municipio de Santiago de Cali
Contribución a la disminución de riesgos de vinculación de los niños, niñas y adolescentes en dinámicas de violencia urbana en Santiago de Cali	BP-26001372			
	BP-26001372A			Beneficiar a 250 personas mediante el Modelo de transformación de dinámicas familiares y comunitarias para la prevención de violencias.
	BP-26001372B			Intervenir 5 Territorios para el desarrollo de habilidades sociales y competencias ciudadanas

2. Sobre "las acciones que se han realizado las medidas de atención y de prevención adoptadas para el Barrio Llano Verde con anterioridad al 11 de agosto de 2020", de acuerdo con el informe de gestión de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana del año 2020 se han identificado las siguientes acciones en el barrio Llano Verde de Santiago de Cali durante la vigencia 2020:

a. Proyecto contribución a la disminución de las violaciones y vulneraciones de los derechos humanos en Santiago de Cali. Se reporta lo siguiente:

Tabla 21.1: Intervenciones del programa de prevención de violencias por Comuna

	Actividad	Lugar	Comuna	Beneficiarios
1	Campañas de prevención de las vulneraciones en los delitos de desaparición y trata de personas	Canasta del Amor - Llano Verde	15	29
		Comedor comunitario Las Delicias de Llano Verde	15	27
3	Ejercicios de promoción de DDHH	Taller DDHH Fundación Corazón Contento - Llano verde	15	29
		Taller DDHH con NNA Fundación Corazón Contento - Llano verde	15	27

Calle 14N No. 6N-23 Edificio San Marino Oficina 502 Teléfonos 661 8707 – 661 8848

www.cali.gov.co



SC-CER652615



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE PAZ
Y CULTURA CIUDADANA

b. Proyecto Plan de paz y convivencia pacífica implementado.

Las acciones más relevantes realizadas para la promoción de la paz y cultura ciudadana en los territorios priorizados de la ciudad fueron las siguientes:

(...)

- Encuentro de red de constructores de paz y Paz al barrio, donde se expuso toda la oferta institucional de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Construcción de Paz, impactando 249 personas en total, en el barrio Llano Verde, comuna 15.

(...)

- El homenaje Sembrando vida a los jóvenes asesinados en Llano Verde, se posicionó en medios de comunicación, se realizó de manera íntima con familiares y amigos cercanos enfocados en generar acción sin daño, sin generar procesos de revictimización, enfocados en un mensaje de esperanza conforme a lo sucedido en Nariño en Samaniego con los jóvenes también asesinados. Conto con la presencia de 60 personas del semillero Afrodes Cali, Afrodes, Semillero Llano Verde, Mesa Efectiva de Participación de Víctimas MEPV y familiares de los jóvenes víctima, realizado en Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación.

(...)

- Se expuso toda la oferta institucional de la Subsecretaría de Derechos Humanos y construcción de Paz,
 - (...) En el barrio Llano Verde comuna 15, impactando 42 personas. (...)

Lo anterior corresponde a la información disponible a la fecha en nuestro Organismo, quedando atento a cualquier aclaración que sea necesaria.

Cordialmente,

FERNANDO SALAZAR RIVEROS
Subsecretario de Derechos Humanos y Construcción por la Paz
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana

Proyectó: Laura Camila Villada Encinales – Contratista

Nexo Causal

Como quiera que ya quedó establecida la inexistencia de una conducta antijurídica predicable a cargo del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, resulta inepto el estudio del presente elemento, pues al consistir éste en la determinación de que una conducta antijurídica es la causa eficiente de un daño, carecería de todo sentido pretender establecer una relación causal entre una conducta incierta o inexistente con el daño alegado.

En este orden de ideas, ante la imposibilidad de concurrencia de los elementos que



estructuran la responsabilidad del Estado a la luz del artículo 90 C.P, no es dable tener su configuración como acreditada, por lo cual, solicito comedidamente a su señoría proferir sentencia favorable a los intereses del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.

Corolario, comedidamente solicito al despacho, declarar probada la presente excepción.

7. CARGA PROBATORIA EN CABEZA DEL ACCIONANTE E INCUMPLIMIENTO DE LA MISMA EN EL PARTICULAR.

Es importante señalar que en virtud del principio de la carga de la prueba, corresponde a la parte actora, demostrar los hechos constitutivos de la falla, para endilgarle así a las entidades accionadas algún tipo de responsabilidad. Sobre este particular se ocupó el Consejo de Estado, en providencia de fecha 08 de junio de 20112, así:

“Cuando se imputa responsabilidad al Estado en virtud de una falla del servicio, que es aquella que se presenta cuando el servicio no funciona, o funciona mal o tardíamente, por el incumplimiento de deberes y obligaciones por parte de las autoridades y de tal circunstancia se derivan daños a terceros, se debe probar la existencia de la falla propiamente dicha, el daño antijurídico sufrido por la víctima, es decir, aquel que jurídicamente no está obligada a soportar, y el nexo de causalidad entre estos dos, es decir, que fue ese erróneo o ilegal comportamiento estatal, el que produjo el daño

(...)

En el presente caso, la parte actora no probó la falla del servicio que pregonó en su demanda y en tales condiciones, considera la Sala que no resulta procedente deducir responsabilidad alguna a cargo de la Nación-Ministerio de Defensa; en consecuencia, estuvieron bien denegadas las pretensiones de la demanda, razón por la cual, se confirmará la sentencia de primera instancia”.

En este orden de ideas, es preciso reiterar que el accionante tiene entre sus mandatos como parte demandante, toda la carga probatoria sobre los perjuicios deprecados en la demanda y por lo tanto cada uno de los daños por los cuales está exigiendo una indemnización debe estar claramente probada a través de los medios probatorios que la ley consagra en estos casos.

Por todo lo anterior solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

8. IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS INMATERIALES AL NO ACREDITARSE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

Frente a las pretensiones formuladas por la parte actora, resulta oportuno señalar que las mismas denotan un evidente ánimo especulativo, puesto que su tasación no cuenta con ningún soporte probatorio que acredite el monto solicitado por los demandantes, los cuales deben atemperarse a los lineamientos y límites establecidos jurisprudencialmente por el H. Consejo de Estado. Al respecto, es preciso manifestar que el máximo Tribunal de lo Contencioso, mediante Acta del 28 de agosto de 2014, unificó jurisprudencia en torno a los montos del resarcimiento cuando se reclaman perjuicios inmatereales y sobre el perjuicio moral, esa Corporación estableció:

“(…)2. PERJUICIO MORAL

El concepto se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo.

2.1 REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE

Para la reparación del daño moral, en caso de muerte, se han diseñado cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas.

Nivel No. 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno- filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio (100 smmv).

Nivel No. 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.

Nivel No. 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.

Nivel No. 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad

o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.

Nivel No. 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.

La siguiente tabla recoge lo expuesto:

Para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva. Para el nivel 5 deberá ser probada la relación afectiva.

Así las cosas, si bien es cierto el reconocimiento de este tipo de perjuicios depende del arbitrio judicial, ello no implica *per se* que las condenas pedidas por este concepto puedan estar al capricho de la parte actora, ya que, se reitera deben atender un criterio de razonabilidad mínimo, en atención al verdadero grado de afectación padecido.

Por tal razón ruego señor juez se desestimen las pretensiones de los demandantes y se declare probada esta excepción.

9. GENÉRICA O INNOMINADA

Solicito al señor Juez decretar cualquier otra excepción de fondo que resulte probada en el curso del proceso y que pueda corroborar que no existe obligación alguna a cargo del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.

Por todo lo anterior solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

MEDIOS DE PRUEBA

Solicito decretar y tener como pruebas las siguientes:

Las que se aportan:

1. Oficio No. 202141610400004951 del 16 de abril de 202- dando respuesta a la personería Llano Verde.



2. Plan de Desarrollo 2020-2023 “CALI UNIDA POR LA VIDA”
3. Oficio No. 202041610400013271 del 25 de agosto de 2020, respuesta a solicitud de información Alerta Temprana AT-085/2018
4. Oficio No. 202041610400012841 del 20 de agosto de 2020, respuesta Personería Municipal AT- 085/2018.
5. Oficio No. 202041610400012831 del 20 de agosto de 2020, respuesta a oficio Acción Preventiva E-2020-004205.
6. Oficio No. 20204161040001386 del 01 de septiembre de 2020, respuesta a actuación preventiva — Seguimiento de las acciones institucionales en atención a las recomendaciones de la Alerta Temprana No. 085 de 2018.
7. Oficio No. 202041610400013111 del 21 de agosto de 2020, Solicitud información trabajo comunitario y de prevención de la violencia en materia de derechos humanos Alerta Temprana 085-2018 Defensoría del Pueblo.
8. Oficio No. 202041610400003134, respuesta a solicitud operativa de primer semestre 2020 Subsecretaría de la Política de Seguridad.
9. Oficio No. 202041610400022311 del 09 de diciembre de 2020, respuesta a solicitud de información sobre actuación preventiva — seguimiento de las acciones institucionales en atención a las recomendaciones de la Alerta Temprana No 085 de 2018.
10. Acta 4161.040.1.3.II Talleres de intervención Instituciones Priorizadas.
11. RESUMEN EJECUTIVO - INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE CALI 2020-2023, Enero-Marzo 2022.
12. RESUMEN EJECUTIVO - INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE CALI 2020-2023, Abril-Junio 2022.
13. RESUMEN EJECUTIVO - INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE CALI 2020-2023, Julio-Septiembre 2021.
14. RESUMEN EJECUTIVO - INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE CALI 2020-2023, Enero-Junio 2021.

15. Acta No. 4161.040.3.2.27 Comité de Territorial Orden Público.
16. Acta No. 4161.040.1.3.29 Comité de Territorial Orden Público.
17. Acta 4161.040.13.13 Comité de Territorial Orden Público.
18. Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana 2020-2023.
19. Oficio No. 202241640300001784 del 21 de septiembre de 2022, respuesta Subsecretaría de Derechos Humanos y Construcción por la Paz.
20. Oficio No. 202241810100043024 Concepto Calidad del bien predio Llano Verde.

ANEXOS

Adjunto a la presente contestación, cada uno de los documentos relacionados en el acápite de pruebas documentales.

Poder especial a mi conferido para actuar con sus respectivos anexos.

NOTIFICACIONES

El señor Alcalde Municipal puede ser notificado en su despacho, ubicado en el tercer piso del Centro Administrativo Municipal CAM, Torre Alcaldía.

Buzón correo electrónico notificacionesjudiciales@cali.gov.co

Respetuosamente



ADRIANA MARCELA LEÓN BOTINA
C.C. No.59123942 de El Tambo (N)
T.P. No.220.245 del C.S. de la J.

